



Asunto: Anteproyecto de modificación de la Ley 7/2009, de 22 de diciembre, de Servicios Sociales de La Rioja.

MEMORIA

Se propone la modificación del artículo 61. ter de la Ley 7/2009, de 22 de diciembre, de Servicios Sociales de La Rioja, relativo a “El concierto social”, mediante la inclusión de un artículo en el Proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2025. Dicha modificación se justifica con los argumentos que a continuación se exponen.

1.- El artículo 61 ter de la Ley 7/2009, de 22 de diciembre, de Servicios Sociales de La Rioja, en redacción dada por el artículo 13 de la Ley 2/2020, de 30 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2020, prevé la figura del concierto social como instrumento organizativo de naturaleza no contractual por medio del cual se produce la prestación de servicios sociales de responsabilidad pública cuya financiación, acceso y control sean públicos, a través de entidades de iniciativa privada, de acuerdo con los requisitos que se establecen en la propia ley y que se desarrollen reglamentariamente. Así mismo, precisa que podrán concurrir a la prestación de servicios sociales mediante concierto social las entidades de iniciativa social privada sin ánimo de lucro y establece que las Administraciones Públicas competentes en materia de servicios sociales, cuando existan análogas condiciones de eficacia, calidad y rentabilidad social, darán prioridad para la gestión de los servicios previstos en la Cartera del sistema público riojano de servicios sociales al régimen de concierto social. Así mismo, el artículo 61 quarter regula el objeto de los conciertos sociales.

No obstante, la figura del Concierto Social se introdujo en la Ley 7/2009, de 22 de diciembre, de Servicios Sociales de La Rioja, mediante la Ley 2/2018, de 3 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2018, al amparo de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento y del Consejo Europeo de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública, que permite diseñar un nuevo marco regulatorio alejado del tradicional modelo sobre contratación pública, dado que los artículos 76 y 77 de la mencionada directiva habilitan tanto la reserva de contratos como un régimen singular en el ámbito de los servicios sociales destinados a las personas.

En este sentido, según dispone el considerando 114 de la Directiva 2014/24/UE, determinadas categorías de servicios, en concreto los servicios que se conocen como servicios a las personas, como ciertos servicios sociales, sanitarios y educativos, siguen teniendo, por su propia naturaleza, una dimensión transfronteriza limitada. Dichos servicios se prestan en un contexto particular que varía mucho de un Estado miembro a otro, debido a las diferentes tradiciones culturales.

Conforme dispone dicho considerando, debe establecerse un régimen específico para los contratos públicos relativos a tales servicios, con un umbral más elevado que el que se aplica a otros servicios, y los servicios a las

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.	Pág. 1 / 9
Expediente	Tipo	Procedimiento		Nº Documento
00860-2024/096012	Memoria justificativa	Solicitudes y remisiones generales		2024/0741993
Cargo		Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1 Directora General de Servicios Sociales e Instituto de Igualdad				
2				



personas con valores inferiores a ese umbral no revisten normalmente interés para los proveedores de otros Estados miembros y quedan fuera de su ámbito de aplicación, a menos que haya indicios concretos de lo contrario, como en la financiación por la Unión de proyectos transfronterizos.

Así mismo, la directiva garantiza que los contratos de servicios a las personas cuyo valor esté situado por encima de ese umbral deban estar sujetos a normas de transparencia en toda la Unión; ofrece a los Estados miembros un amplio margen de maniobra para organizar la elección de los proveedores de los servicios del modo que consideren más oportuno teniendo en cuenta la importancia del contexto cultural y el carácter delicado de estos servicios; impone a este tipo de servicios por encima del umbral establecido solo la observancia de los principios fundamentales de transparencia e igualdad de trato y asegura que los poderes adjudicadores puedan aplicar, para la elección de los proveedores de servicios, criterios de calidad específicos, tal y como recoge el artículo 76 de la directiva.

Finalmente el considerando 114 añade que los Estados miembros y los poderes públicos siguen teniendo libertad para prestar por sí mismos esos servicios u organizar los servicios sociales de manera que no sea necesario celebrar contratos públicos, por ejemplo, mediante la simple financiación de estos servicios o la concesión de licencias o autorizaciones a todos los operadores económicos que cumplan las condiciones previamente fijadas por el poder adjudicador, sin límites ni cuotas, siempre que dicho sistema garantice una publicidad suficiente y se ajuste a los principios de transparencia y no discriminación.

En el derecho interno, la Exposición de Motivos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transpone al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y el artículo 11.6 de la citada ley, de carácter básico, se expresan en el mismo sentido. Así mismo, se excluye de la citada ley la prestación de servicios sociales por entidades privadas de esta forma.

Por su parte, la Ley 7/2009, de 22 de diciembre, de Servicios Sociales de La Rioja, regula en el artículo 7 de los principios de responsabilidad pública y garantía de la existencia y disponibilidad de los servicios y prestaciones; así como de atención personalizada e integral y continuidad de la atención, coordinación y cooperación entre sí y con la iniciativa privada, especialmente con la iniciativa social sin ánimo de lucro y de promoción de una gestión orientada a la calidad, por parte de las administraciones públicas en el conjunto del Sistema Riojano de Servicios Sociales. Y el artículo 61.1 de la citada ley, establece como una forma de organización de los servicios sociales del Sistema Público Riojano de Servicios Sociales la gestión indirecta en régimen de concierto social previsto en el Título VII garantizando en todo caso, los principios de igualdad y no discriminación, publicidad y transparencia.

Este contexto normativo europeo, estatal y autonómico fundamenta la modificación de la regulación de la

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.			Pág. 2 / 9
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2024/096012	Memoria justificativa	Solicitudes y remisiones generales	2024/0741993
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora
1 Directora General de Servicios Sociales e Instituto de Igualdad			
2			



figura de concierto social en el ámbito de los servicios sociales dirigidos a las personas en nuestra Comunidad Autónoma, además de lo dispuesto en la disposición adicional cuadragésima novena de la Ley 9/2007, de 8 de noviembre, en virtud de la cual lo establecido en esta ley no obsta para que las Comunidades Autónomas en el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas legislen articulando instrumentos no contractuales para la prestación de servicios públicos destinados a satisfacer necesidades de carácter social y de las competencias exclusivas atribuidas en artículo 8 apartados 30, 31 y 32 del Estatuto de Autonomía de La Rioja en materia de servicios sociales.

2.-A partir de la aprobación de la directiva europea, varias comunidades autónomas han desarrollado una normativa específica que si bien presenta principios comunes del concierto social, difieren en cuanto a la definición de la nueva figura de prestación de servicios a las personas, ámbitos de aplicación (servicios sociales, salud), servicios a concertar (personas mayores, dependencia, menores, discapacidad...) y presencia o no de ánimo de lucro en las entidades privadas que pueden acceder a la prestación de los servicios de esta forma, si bien el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en la reciente Sentencia de 14 de julio de 2002, dictada con ocasión de la cuestión prejudicial interpuesta por un Tribunal Superior de Justicia autonómico en relación a la adecuación de una norma autonómica de desarrollo de la acción concertada para la prestación de servicios sociales de asistencia a las personas que reserva a las entidades privadas sin ánimo de lucro la facultad de celebrar estos acuerdos, resulta unificadora y aclaratoria en algunos aspectos.

Para ello interpreta la adecuación del decreto autonómico a la Directiva 2014/2024/UE sobre contratación pública, relativa a contratos públicos y concursos de proyectos cuyo valor estimado sea igual o superior a los umbrales establecidos en su artículo 4, con independencia de la calificación por el derecho español de estos acuerdos como instrumentos organizativos de naturaleza no contractual.

Según el TJUE los acuerdos de acción concertada comprendidos en el ámbito de aplicación de la directiva deben consistir en contratos públicos de servicios en el sentido que establece su artículo 2.1.9, las prestaciones de servicios realizadas normalmente a cambio de una retribución constituyen actividades económicas sin que sea necesario que sea pagada por su beneficiario y sólo estas actividades de carácter económico pueden ser objeto de un contrato público de servicios en el sentido de la directiva. Incluso señala en relación con los contratos celebrados por entidades sin ánimo de lucro, que pueden ejercer una actividad económica en el sentido de la directiva y estar sujetas a las normas del Derecho de la Unión en materia de contratos públicos, así como prestar servicios a cambio de una retribución que sin corresponder al ejercicio de prerrogativas del poder público, se prestan en interés público en competencia con los ofrecidos por operadores que actúan con ánimo de lucro.

También señala el TJUE que la consecución de una finalidad social o la toma en consideración del principio de solidaridad en el marco de la prestación de los servicios no impide considerar como actividad económica a

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			Pág. 3 / 9
en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.			
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2024/096012	Memoria justificativa	Solicitudes y remisiones generales	2024/0741993
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora
1 Directora General de Servicios Sociales e Instituto de Igualdad			
2			



dicha prestación y el carácter oneroso del contrato público al existir prestación y contraprestación en cada una de las partes y aunque la retribución prevista se limite al reembolso de los gastos soportados por la prestación del servicio. Y que únicamente quedan excluidos del ámbito de aplicación de la directiva en virtud de lo dispuesto en los considerandos 4 y 114 último párrafo, los procedimientos mediante los cuales el poder adjudicador renuncia a comparar y clasificar las ofertas admisibles y a designar al operador u operadores a los que se otorga la exclusividad del contrato.

3.- El TJUE considera que el recurso exclusivo a las entidades privadas sin ánimo de lucro para garantizar la prestación de tales servicios sociales puede estar motivado tanto por los principios de universalidad y de solidaridad, propios de un sistema de asistencia social, como por razones de eficiencia económica y de adecuación, toda vez que permite que esos servicios de interés general sean prestados en condiciones de equilibrio económico en el orden presupuestario, por entidades constituidas esencialmente para servir al interés general y cuyas decisiones no se guían por consideraciones puramente comerciales.

También confirma al amparo del considerando 114 y del artículo 76 de la Directiva 2014/24, que el régimen jurídico establecido se caracteriza por el amplio margen de maniobra de que disponen los Estados miembros para organizar, del modo que consideren más oportuno, la elección de los prestadores de los servicios enumerados en el anexo XIV de la directiva, así como por tener en cuenta el Protocolo nº 26, que consagra en particular, la amplia capacidad de discreción de las autoridades nacionales para hacer que los servicios de interés económico general se presten del modo lo más cercano posible a las necesidades de las personas usuarias. No obstante el Tribunal también entiende que el principio de igualdad de trato de los operadores económicos, tal como se consagra actualmente en el artículo 76 de la Directiva 2014/24 se opone a que tales contratos públicos puedan adjudicarse directamente, sin un proceso competitivo, a una entidad sin ánimo de lucro que no sea una entidad de voluntariado dado que exige que, antes de proceder a tal adjudicación, el poder adjudicador compare y clasifique las ofertas respectivas de las diferentes entidades sin ánimo de lucro que hayan manifestado su interés, teniendo en cuenta, en particular, el precio de esas ofertas, aun cuando dicho precio esté constituido por el total de los costes cuyo reembolso deberá garantizar el poder adjudicador.

Finalmente, en cuanto al principio de transparencia, el TJUE argumenta que se exige del poder adjudicador un grado de publicidad adecuado que permita, por un lado, abrir a la competencia los procedimientos de adjudicación y, por otro lado, controlar su imparcialidad para posibilitar a cualquier operador interesado decidir concurrir a licitaciones sobre la base de toda la información pertinente y garantizar que no exista riesgo de favoritismo y arbitrariedad por parte del poder adjudicador.

3.- En concreto, según el artículo 76 de la Directiva, los Estados miembros establecerán normas nacionales para la adjudicación de los contratos sujetos a lo dispuesto en el capítulo I del título II de la misma a fin de garantizar que los poderes adjudicadores respetan los principios de transparencia y de igualdad de trato de

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			Pág. 4 / 9
en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.			
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2024/096012	Memoria justificativa	Solicitudes y remisiones generales	2024/0741993
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora
1 Directora General de Servicios Sociales e Instituto de Igualdad			
2			



los operadores económicos y serán libres de determinar las normas de procedimiento aplicables, siempre que tales normas permitan a los poderes adjudicadores tener en cuenta la especificidad de los servicios en cuestión.

Así mismo, teniendo en cuenta que se trata de servicios dirigidos a las personas, asegura que los Estados miembros garanticen que los poderes adjudicadores puedan tener en cuenta la necesidad de garantizar la calidad, la continuidad, la accesibilidad, la asequibilidad, la disponibilidad y la exhaustividad de los servicios, las necesidades específicas de las distintas categorías de personas usuarias, incluidos los grupos desfavorecidos y vulnerables, la implicación y la responsabilización de las personas usuarias y la innovación. Además, los Estados miembros podrán disponer que la elección del proveedor de servicios se haga sobre la base de la oferta económicamente más ventajosa, teniendo en cuenta criterios de calidad y de sostenibilidad en el caso de los servicios sociales.

Conforme establece el artículo 77 de la directiva, los Estados miembros podrán disponer que los poderes adjudicadores estén facultados para reservar a determinadas organizaciones el derecho de participación en procedimientos de adjudicación de contratos públicos exclusivamente en el caso de los servicios sociales, culturales y de salud que se contemplan en el artículo 74 y que lleven los códigos que enumera. Así mismo, en su apartado dos establece las condiciones que deberán cumplir las organizaciones que puedan participar en los procedimientos de adjudicación de este tipo de contratos y que son los siguientes: a) que su objetivo sea la realización de una misión de servicio público vinculada a la prestación de los servicios relacionados; b) que los beneficios se reinviertan con el fin de alcanzar el objetivo de la organización; en caso de que se distribuyan o redistribuyan beneficios, la distribución o redistribución deberá basarse en consideraciones de participación; c) que las estructuras de dirección o propiedad de la organización que ejecute el contrato se basen en la propiedad de los empleados o en principios de participación o exijan la participación activa de las personas empleadas, usuarias o las partes interesadas, y d) que el poder adjudicador de que se trate no haya adjudicado a la organización un contrato para los servicios en cuestión con arreglo a este artículo en los tres años precedentes. También establece que la duración máxima del contrato no excederá de tres años y la obligación de hacer referencia a este artículo.

4.- El TJUE ratifica la existencia de un amplio margen de maniobra para organizar la elección de las entidades prestadoras de los servicios sociales así como la presencia en las entidades privadas para utilizar esta modalidad de contratación simplificada, de una finalidad social, de la consecución de los objetivos de solidaridad y de eficiencia presupuestaria y de la reinversión de los eventuales beneficios que se deriven de la ejecución de dichos contratos en los fines sociales que le sean propios. También garantiza el cumplimiento del principio de transparencia y exige un proceso competitivo en caso de entidades que no sean de voluntariado.

Amplio margen de maniobra que permite considerar que puedan acceder a las prestaciones de servicios

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.			Pág. 5 / 9
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2024/096012	Memoria justificativa	Solicitudes y remisiones generales	2024/0741993
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora
1 Directora General de Servicios Sociales e Instituto de Igualdad			
2			



sociales dirigidos a las personas por la vía del concierto social no solo las entidades sin ánimo de lucro sino también las entidades con ánimo de lucro. La experiencia en la prestación de servicios sociales en nuestra Comunidad Autónoma por estas entidades supone que puedan cumplir igualmente las garantías del art. 76.2 de la directiva, así como las condiciones establecidas en el artículo 77 siempre que asuman estatutariamente la reinversión de sus posibles beneficios en fines sociales. Así lo han considerado en sus normas otras Comunidades Autónomas (Murcia, Baleares y Cataluña).

Además el acceso de las entidades con ánimo de lucro a la figura del concierto social resulta coherente con su consideración como servicio de interés económico general tal y como ha interpretado el TJUE y con los principios establecidos en los artículos 106.2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y 38 de la Constitución Española.

La modificación también se justifica en la necesidad de garantizar la cobertura de la prestación indirecta de los servicios sociales que se prevean que puedan ser objeto de concierto social mediante esta figura, relacionados con la reserva y ocupación de plazas para uso exclusivo de las personas usuarias de servicios sociales y gestión integral de prestaciones técnicas, programas, servicios o centros, tal y como disponen los artículos 61. ter apartado cinco y 61 quarter de la Ley 7/2009, de 22 de diciembre.

Así mismo, con la modificación propuesta se añade que, cuando existan análogas condiciones de eficacia, calidad y rentabilidad social, se priorice la iniciativa social sin ánimo de lucro en consonancia con el principio de promoción de la iniciativa social sin ánimo de lucro recogido en el artículo 7.k) de La ley 7/2009, de 22 de diciembre.

Por último, teniendo en cuenta la interpretación del TJUE en el sentido de entender la prestación indirecta de los servicios sociales a través de esta figura como un contrato sujeto a la directiva europea de contratación pública dado el carácter económico de la actividad, si bien con un régimen jurídico simplificado, se propone eliminar la referencia a su naturaleza no contractual y recogerlo como una forma de gestión indirecta diferenciada del tradicional régimen contractual al igual que otras Comunidades Autónomas (Castilla y León y Andalucía).

4.- Impacto económico y de género.

La modificación supone un impacto económico favorable por cuanto amplía las entidades privadas que pueden ser objeto de concierto social. Así mismo, se estima un posible impacto presupuestario en función de los servicios sociales que se prevean objeto de concierto social y de las entidades privadas que presten estos servicios mediante concierto, así como un positivo impacto social dado que el concierto supone una posibilidad más de prestación indirecta que beneficia no sólo a las administraciones públicas y entidades privadas sino a

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.			Pág. 6 / 9
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2024/096012	Memoria justificativa	Solicitudes y remisiones generales	2024/0741993
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora
1 Directora General de Servicios Sociales e Instituto de Igualdad			
2			



las personas destinatarias de los servicios por atender a unas condiciones que contribuyen a la prestación de los servicios sociales de una forma lo más cercana posible a la ciudadanía.

En cuanto al impacto de género, la modificación propuesta se refiere al concierto con entidades privadas de la prestación de servicios sociales destinados a las personas, por lo que afecta al acceso de los recursos públicos y por tanto es susceptible de análisis a la vista de lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley 7/2023, de 20 de abril, de igualdad efectiva de mujeres y hombres de La Rioja.

En concreto, el apartado uno del citado artículo establece que las administraciones públicas de La Rioja, en el ámbito de sus competencias, integrarán la perspectiva de género en las políticas de bienestar social, en su desarrollo normativo y en los diferentes programas sectoriales de intervención dirigidos a garantizar a todas las personas el disfrute de los derechos sociales básicos. Este aspecto si bien no se refleja en la propuesta de modificación, si figura en el apartado 6 del artículo que se modifica, al contemplar entre otros principios a tener en cuenta en el establecimiento del concierto social, la igualdad de oportunidades, así como entre las cláusulas o medidas a establecer, las relacionadas con la promoción e igualdad de género.

Así mismo, se estima un impacto positivo de dicha medida, que podrá ser medido una vez se dispongan datos de ejecución de los conciertos sociales que se establezcan.

ANEXO

Modificación de la Ley 7/2009, de 22 de diciembre, de Servicios Sociales de La Rioja.

El artículo 61 ter queda redactado como sigue:

“Artículo 61 ter. El concierto social

1. Se entiende por régimen de concierto social el instrumento organizativo por medio del cual se produce la prestación de servicios sociales de responsabilidad pública cuya financiación, acceso y control sean públicos, a través de entidades de iniciativa privada, con los requisitos que se establezcan en esta ley y en la normativa por la que se desarrolle reglamentariamente.
2. Podrán concurrir a la prestación de servicios sociales mediante concierto social las entidades de iniciativa social privada sin ánimo de lucro, así como las entidades privadas con ánimo de lucro que asuman estatutariamente la reinversión de sus posibles beneficios en fines sociales.
3. Las Administraciones Públicas con competencias en materia de servicios sociales, cuando existan análogos

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.			Pág. 7 / 9
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2024/096012	Memoria justificativa	Solicitudes y remisiones generales	2024/0741993
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora
1 Directora General de Servicios Sociales e Instituto de Igualdad			
2			



condiciones de eficacia, calidad y rentabilidad social, darán prioridad para la gestión de los servicios previstos en la Cartera del sistema público riojano de servicios sociales mediante el régimen del concierto social a las entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro constituidas y registradas como tales.

4. El concierto social se establece como una modalidad diferenciada de la normativa de contratación del sector público, siendo necesario establecer condiciones especiales, dadas las especificidades de los servicios sociales, debiendo cumplir los principios de publicidad, transparencia y no discriminación.

5. Para que se determine la procedencia de prestar determinados servicios sociales a través de la fórmula del concierto social, será preceptivo que los departamentos competentes en materia de servicios sociales realicen la previsión de las prestaciones y servicios que se pretenden que sean objeto de determinado concierto social, junto con una tasación de su coste y un informe justificativo de carecer de medios propios para su gestión, y de la modalidad e idoneidad de la gestión elegida.

6. En el establecimiento de los conciertos sociales para la prestación de servicios sociales se atenderá a los principios de atención personalizada e integral, arraigo de la persona en el entorno de atención social, continuidad en la atención y calidad del servicio para todas las personas usuarias, solidaridad, igualdad de oportunidades, eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, adecuación a la planificación estratégica de los servicios públicos, promoción de fines sociales y ambientales, innovación en la gestión de entidades y servicios públicos, estableciendo dichos principios de manera expresa en el objeto o condiciones de ejecución de los conciertos.

Por ello, se establecerán requisitos, cláusulas, medidas de preferencia o medidas de discriminación positiva, tales como criterios sociales, de promoción de la igualdad de género, de calidad, de experiencia y trayectoria acreditada, u otros que se determinen reglamentariamente. En todo caso, el concierto deberá contemplar el clausulado social que le resulte aplicable.

7. El Gobierno de La Rioja, reglamentariamente, desarrollará las formas de gestión de la prestación de los servicios sociales del Sistema Público Riojano de Servicios Sociales previstas en este título.

Reglamentariamente se establecerán los principios generales y los aspectos y criterios básicos a los cuales habrán de someterse los conciertos sociales, que contemplarán siempre los principios regulados en la presente ley, referidos al cumplimiento de los requisitos previstos, a la tramitación, a la formalización, condiciones de actuación de las entidades concertadas, a la vigencia o la duración máxima del concierto y sus causas de extinción, a las condiciones para su renovación o su modificación, a las obligaciones de las entidades que presten el servicio concertado y de la Administración pública otorgante del concierto social, a la sumisión del concierto al derecho administrativo y otras condiciones necesarias en el marco de lo previsto en la presente

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.	Pág. 8 / 9
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento	
00860-2024/096012	Memoria justificativa	Solicitudes y remisiones generales	2024/0741993	
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora	
1 Directora General de Servicios Sociales e Instituto de Igualdad				
2				



ley.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.	Pág. 9 / 9
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento	
00860-2024/096012	Memoria justificativa	Solicitudes y remisiones generales	2024/0741993	
Cargo	Firmante / Observaciones		Fecha/hora	
1	Directora General de Servicios Sociales e Instituto de Igualdad			
2				